

*Gabriel Flores*

## **La deuda pública y la crisis de la COVID-19**

*nuevatribuna*, julio de 2020.

### **El necesario aumento de la deuda pública para afrontar la crisis del covid-19**

10 de julio de 2020.

Los datos oficiales indican un **retroceso del PIB en el primer trimestre de 2020 del 5,2%**. Al que habrá que sumar el del segundo trimestre, que confirmará la recesión con un nuevo y mayor hundimiento del producto que, según recientes previsiones del Banco de España, supondrá un **batacazo de entre el 16% y el 22%**. Una descomunal pérdida de entre una cuarta o quinta parte del PIB en tan solo un semestre, que ya permite hablar de la mayor recesión de la historia de la economía española desde que existen series comparables sobre la evolución del PIB.

Gracias a las decisiones tomadas por las instituciones comunitarias, que han roto de hecho con la estrategia de austeridad y devaluación salarial impuesta en 2010 para afrontar la crisis de deuda pública de los países del sur de la eurozona, y a la existencia de un gobierno de [coalición progresista entre PSOE y UP](#), los costes de esta enorme recesión se paliarán con un **aumento del gasto público de similar intensidad a la cuantía del hundimiento de la actividad económica**. De esta forma, gracias a ese aumento del gasto y el déficit públicos, se ha logrado contener la pérdida de empleos, tejido empresarial y rentas y reforzar la protección de los sectores más vulnerables que han sido especialmente golpeados por la parálisis económica provocada por la pandemia y el necesario confinamiento.

El **aumento del gasto público continuará en 2021 y 2022** con el objetivo de recuperar los empleos, rentas salariales y bienestar perdidos durante la recesión e impulsar un proceso de reactivación económica espoleado por un plan de inversión comunitario que contará con una financiación común encaminada a dirigir un proceso de modernización productiva que pretende acelerar la transición digital y verde. Un proyecto tan ambicioso como novedoso que se está acabando de definir en estos días (con las correspondientes concesiones a los socios que intentan limitar su alcance) y se aprobará probablemente en la próxima reunión del Consejo Europeo del 17 y 18 de julio o, si para entonces no hay acuerdo, en una cumbre extraordinaria posterior que se celebrará a finales de julio o primeros días de agosto, porque aunque existen opositores y obstáculos a este plan comunitario no hay otra opción que no sea la decadencia.

### **Un desastre mundial que requiere el aumento de la deuda pública**

Al igual que el confinamiento ha sido el instrumento necesario para contener la pandemia, el aumento del gasto público y el consiguiente crecimiento de la deuda pública están siendo los imprescindibles remedios para reducir la intensidad de la recesión económica y minimizar y compensar sus destructivos impactos económicos y sociales. Nada distinto de lo que ocurre en el resto de países capitalistas de mayor renta agrupados en la OCDE que han actuado, sin excepción, del mismo modo y con parecida intensidad en el aumento del

déficit público. Ni nada que criticar por ese conveniente e **imprescindible aumento de la deuda pública**.

Naturalmente, toda decisión acarrea costes, y los que ocasione el futuro tratamiento para reducir los desequilibrios de las cuentas públicas pueden llegar a ser, una vez superada la recesión, muy importantes, sobre todo si resucitan los espíritus y políticas austericidas que tanto daño hicieron en las economías y sociedades del sur de la eurozona entre 2011 y 2014. Pero esa futura batalla, la de impedir que vuelvan a imponerse las políticas de austeridad, tendrá su momento, tras la reactivación económica. Por ahora, es suficiente desbaratar las intenciones de los países “frugales” que tratan condicionar el plan comunitario de recuperación económica que está actualmente en discusión a la aceptación de futuras y apresuradas políticas de consolidación fiscal, ajuste presupuestario y reformas desreguladoras del mercado laboral, pensiones o reducción de bienes públicos.

Limitémonos a decir que esas condiciones son tajantemente rechazadas por los gobiernos de los países del sur de la eurozona, porque les va en ello [su futuro y el de la UE](#), y que la pugna por impedir que resurjan tras la reactivación las políticas de austeridad no es, ni mucho menos, una batalla perdida, porque los dogmas del riesgo moral y las doctrinas imperantes en los últimos años sobre los ajustes presupuestarios asociados a reformas estructurales del mercado laboral como motores del crecimiento ya han saltado por los aires y han sido sustituidos por políticas monetarias y fiscales expansionistas. El campo en el que se desarrollará esa futura batalla y su resultado dependerá, en gran medida, del éxito o el fracaso del plan de reactivación económico que apruebe finalmente el Consejo Europeo, que no solo tiene la pretensión de reconstruir los factores productivos dañados por la recesión, sino también y sobre todo la de impulsar la modernización productiva y la transición digital y verde del conjunto de la economía comunitaria para evitar divergencias productivas y de rentas que, de seguir creciendo, impedirían un funcionamiento eficaz del mercado único, quitando toda razón de ser y todos los argumentos para apoyar el proyecto de unidad europea.

Aterricemos en algunos datos del desastre mundial económico y social que ya se ha producido, además de la hecatombe humanitaria que presenta un saldo a día de hoy de más de medio millón de muertes y doce millones de personas contagiadas. Esta pandemia no va a ser una catástrofe, ya es una catástrofe mundial. Y no ha sido mayor por las políticas monetarias y presupuestarias expansionistas que han aplicado todos los gobiernos de todos los países; especialmente, los de los países capitalistas avanzados que contaban con mayor capacidad y márgenes de endeudamiento público.

Quizás, si en lugar de utilizar la evolución del antipático concepto del PIB cuantificamos el número de empleos perdidos en todo el mundo se entienda mejor el tamaño del desastre económico y sus consecuencias. Según datos recientes de la OIT, en el primer trimestre de este año han desaparecido en todo el mundo el equivalente a 160 millones de empleos a tiempo completo (de 40 horas semanales) o un 4,5% del empleo total. Las últimas previsiones, para el segundo trimestre, con un confinamiento más generalizado e intenso, son de unas pérdidas aún mayores, un 10,5% de los empleos totales o lo que es lo mismo 365 millones de empleos a tiempo completo. Sus efectos sociales pueden comprenderse mejor si se piensa que la pérdida de horas trabajadas ha golpeado con especial saña a los sectores de la economía informal que predominan en los países pobres o empobrecidos: de un total aproximado de 2.000 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía

informal, tres cuartas partes se han visto afectadas y han perdido el 60% de sus rentas; especialmente en América Latina, donde la pérdida de rentas entre estos trabajadores alcanzó un 81% del total de sus ingresos, y en el conjunto de los países de renta baja y media-baja, con una pérdida de rentas del 82%. **Un auténtico desastre social que ha aumentado masivamente los niveles de pobreza y desigualdad en el interior de todos los países** y entre las grandes regiones mundiales, con un especial descalabro de los países pobres por sus enormes dificultades para endeudarse y disponer de la financiación necesaria para combatir la pandemia y sus impactos económicos y sociales.

En Europa, sin dejar de ser un desastre relativo, la pandemia provocó una pérdida de empleos muy inferior, algo más de 4 millones de empleos (un 2,5% del total) en el primer trimestre y 20 millones en el segundo trimestre (un 13,1% del total). Una pérdida de empleos y rentas salariales que ha sido amortiguada por la pronta reacción de las instituciones comunitarias y los respectivos gobiernos nacionales, que mantuvieron gran parte de los empleos, el tejido empresarial y las rentas de trabajadores asalariados y autónomos con fórmulas similares a las que en España se han concretados en los ERTE, rentas mínimas, reducciones y moratorias fiscales y líneas de crédito barato con garantías del sector público.

Según la **Actualización del Programa de Estabilidad 2020** presentada por el Gobierno de España, la reducción anual del número de horas trabajadas en la economía española este año 2020 alcanzarán un porcentaje estimado de casi un 10% del total, concentradas en el primer semestre del año; sin embargo, la previsión de aumento de la tasa de paro en 2020 será de algo menos de 6 puntos porcentuales, hasta el 19% de la población activa. Gracias a los ERTE (que han mantenido 3,4 millones de empleos) y a las políticas de protección de empleos y empresas, la parálisis económica no se ha traducido en una pérdida de similar cuantía de empleos y rentas: el mayor nivel de pérdidas de trabajadores afiliados a la Seguridad Social fue de 883.053, entre febrero y abril, y el número de empresas inscritas en la Seguridad Social se redujo en 91.240 durante el mismo periodo. Sin los ERTE y el resto de medidas que han protegido la actividad económica y el tejido empresarial, la tasa de paro habría sobrepasado este año, muy probablemente, el nivel máximo del 26,9% de 2013 y el número de empresas desaparecidas habría sido mucho mayor. Del mismo modo que sin el Ingreso Mínimo Vital (diseñado para proteger en una primera fase a 850.000 hogares y un total de 2,3 millones de personas que sufren mayores riesgos de exclusión social) y el resto de medidas de protección social que se han aprobado, la explosión de pobreza y desigualdad habría alimentado una situación política y social límite, que es la que pretendían Casado y Abascal con su alocada apuesta por la ingobernabilidad.

### **El generalizado y desigual aumento de la deuda pública mundial**

Resumamos las estimaciones de las cuentas públicas españolas este año 2020 realizadas por el Gobierno de España en abril (Actualización del Programa de Estabilidad, 2020): el déficit público alcanzará un 10,3% del PIB como consecuencia de una caída de la recaudación pública de 25.711 millones de euros y un incremento del gasto público de 54.765 millones de euros. Un desconocido incremento anual del gasto público, pese a que los intereses pagados por la deuda pública apenas variarán en 3 décimas (de un 2,3% en 2019 a un 2,6% del PIB) gracias al programa de compra de deuda pública del BCE. Como consecuencia de ese déficit, la deuda pública española dará un gran salto, desde el 95,5% del PIB en 2019 hasta el 115,5%, sin llegar a perder su solvencia. **Sin el respaldo del BCE,**

## **España no habría podido financiar ese déficit público y se habría convertido ya en un Estado insolvente, incapaz de atender los pagos derivados de su deuda pública.**

De igual forma, sin la suspensión de las reglas presupuestarias establecidas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento o sin la ratificación del Consejo Europeo del 23 de abril de un paquete de 540.000 millones de euros, fundamentalmente en forma préstamos baratos no sujetos a condicionalidad, para mantener el empleo (programa “Sure”), permitir una atención sanitaria más eficaz y proporcionar liquidez a empresas y autónomos y evitar su cierre, los impactos inmediatos de la pandemia habrían sido mucho más destructivos. Por último, sin los fondos comunitarios del Plan de reactivación de la economía europea pendiente de aprobar, España no podría impulsar la reactivación de su economía, porque carece de capacidad y márgenes de financiación suficientes. Gracias a ese Plan y a la financiación comunitaria, España podrá acortar a dos años (2021 y 2022) el periodo para superar la recesión y sus impactos más destructivos.

Las últimas estimaciones de evolución de las cuentas públicas españolas en 2020, publicadas por el FMI el pasado mes de junio, son peores que todas las anteriores, como consecuencia de una mayor caída del PIB (-12,8%): el déficit público alcanzaría en 2020 el 13,9% del PIB y la tasa de endeudamiento se elevaría hasta el 123,8%.

Aun así, las previsiones del FMI para los países capitalistas avanzados que forman parte del G-20 superarían con mucho, este año 2020, los desequilibrios de las cuentas públicas españolas: su déficit medio sería del 18% del PIB (con EEUU en cabeza, 23,8%) y la deuda pública, del 141,4% del PIB (con Japón, 268% e Italia, 161%, encabezando la clasificación). Gracias a estos inéditos déficits públicos los países capitalistas avanzados conseguirán que el hundimiento del producto no se aproxime a las nefastas cotas y consecuencias económicas, sociales y políticas provocadas por la crisis financiera de 1929 y la consiguiente Gran Depresión.

La crisis del covid-19 destilará en la próxima década un mundo con un muy alto endeudamiento público y grandes diferencias entre los países capitalistas de mayor nivel de renta, que pueden permitirse tener grandes déficits públicos y altos niveles de endeudamiento público, y los países emergentes o en desarrollo de bajo nivel de renta, que no podrán aumentar tanto sus déficits y deudas públicas y que, como consecuencia no podrán afrontar con similar contundencia la lucha contra la pandemia, contener sus impactos económicos y sociales o propiciar la futura reactivación económica. Así, frente al déficit público ya mencionado (una media del 18% del PIB) de los países avanzados del G-20, los países emergentes también pertenecientes al G-20 solo alcanzarán de media un 11,3%. Y los países en desarrollo de débil renta, apenas un 6,1%. La consecuencia social de esta tan desigual utilización del déficit público para contener los impactos de la pandemia serán un mayor crecimiento de la pobreza en los países más pobres y una mayor desigualdad de renta entre países ricos y países pobres, tendencias que tanto valen para este año de contención de la pandemia y la recesión como para los años 2021-2022 de reactivación económica y superación de la recesión.

Del mismo modo, los niveles medios de endeudamiento público de los países emergentes (64,1% del PIB) y de los países más pobres (48,2%) se mantendrán en niveles muy inferiores a los de los países más ricos (141,4%). Pero no por ello es menos importante para la comunidad internacional la gestión de una reestructuración y anulación de su deuda

pública generada por el covid-19 en los países más pobres, porque es imprescindible para que sus economías y poblaciones puedan respirar y plantearse su simple supervivencia.

En un próximo artículo analizaré qué fórmulas de gestión de los altos niveles de la deuda pública en los países capitalistas desarrollados y, especialmente, en la UE, se están barajando, son previsibles o más probables. Sólo adelantaré dos ideas. Primera, cualquier intento de revivir las viejas reglas presupuestarias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento o concretarlas en apresuradas políticas de consolidación fiscal y ajuste presupuestario como los que sufrimos entre 2011 y 2014 son improbables y serían inaceptables y gravemente dañinas para los países del sur de la eurozona y el propio proyecto de unidad europea. Y segunda, no hay soluciones mágicas o sin costes en la necesaria reducción paulatina de la deuda pública mundial.

## ¿Cómo, cuándo y quién pagará la deuda pública?

16 de julio de 2020.

La deuda pública aumenta rápida e intensamente en todo el mundo para afrontar la pandemia y reducir sus desastrosos impactos económicos y sociales. Más en los países capitalistas desarrollados, por su mayor capacidad de endeudamiento, y mucho menos en los países pobres y empobrecidos que, pese a tener niveles de deuda pública muy inferiores y problemas que atender más graves, apenas pueden obtener nueva financiación en los mercados de deuda. Los datos de ese endeudamiento generalizado se apuntaban en mi [anterior artículo](#): mientras la deuda pública de los países más pobres acabará situada a finales de 2020 en una media del 48,2% de su PIB, la de los países emergentes alcanzará el 64,1% y la de los países ricos de mayor renta duplicará o triplicará esos porcentajes, hasta alcanzar el 141,4%.

**España acabará este año con un porcentaje de deuda pública inferior de alrededor del 115% del PIB**, por debajo de la media de los países de alta renta, pero por encima de la eurozona, que superará por poco el 100% del PIB. Aún queda el mayor arreón, la deuda pública que generarán los gastos e inversiones públicas que serán necesarios en 2021 y 2022 para superar la recesión e impedir que siga desplegando todo su poder destructivo de empleos y empresas viables. En todo caso, del mismo modo que la recesión provocada por el covid y el necesario confinamiento ha sido ya muy grave y de un nivel desconocido desde la Segunda Guerra Mundial, los niveles de deuda pública alcanzarán a finales de 2022 cotas mundiales desconocidas hasta ahora.

Como cada momento tiene su afán, no hay que perder de vista que, si hoy la deuda pública es una parte importante de la solución al desastre causado por la pandemia, antes o después la enorme montaña de deuda pública acumulada en estos años se convertirá en un grave problema práctico en busca de solución urgente.

Por ahora, las futuras fórmulas a utilizar para reducir la deuda pública forman parte de un debate a medio camino entre la teoría económica y la confrontación ideológica entre propuestas neoliberales y progresistas. Mientras la recesión perdure, la necesidad de incrementar el gasto público contará con un apoyo generalizado en todo el mundo. Pero llegará el momento, cuando la recesión sea superada, que se entablará una dura confrontación para definir las medidas y ritmos de reducción de la deuda.

En las últimas semanas, las **disputas políticas en Europa** se concentran en la negociación que definirá el plan común de reactivación económica propuesto por la Comisión Europea y que se debatirá en la cumbre que comienza el 17 de julio. Los principales puntos de desencuentro son el tamaño (750.000 millones de euros), la relación entre transferencias y préstamos (500.000 y 250.000 millones, respectivamente) y la letra pequeña de la condicionalidad asociada al reparto, desembolso y control de las inversiones financiadas con la deuda común.

Si, como parece, en esta cumbre no se llega a un acuerdo, la aprobación de un plan de relanzamiento de la economía europea por parte del Consejo Europeo se concretará en un plazo de tiempo relativamente breve, porque es absolutamente necesario para que el mercado único funcione y no se fragmente aún más que en los últimos años. La recesión no podrá ser superada con rapidez sin esos fondos comunes ni el proyecto de unidad europea tendrá futuro si se intensifican, como en la última década, unas divergencias de estructuras y especializaciones productivas y de rentas por habitante que perjudican a los países del sur de la eurozona y se arroja por la borda, definitivamente y en una situación crítica de parte de sus socios, los principios de solidaridad y cohesión económica, social y territorial, incumpliendo con plena conciencia las promesas de convergencia.

No hay alternativa a ese plan comunitario de reactivación económica que no pase por la decadencia de la UE y un prolongado estancamiento económico que dificultarían la transición digital y verde que se pretende y perpetuarían el desigual reparto de beneficios y costes que propicia el actual, inacabado e ineficaz mercado único. No hay alternativa.

Por eso, aunque la negociación que se está desarrollando no pinta bien, lo previsible es que antes o después los países refractarios a la **mutualización del plan de reactivación** obtengan algunas concesiones (por ejemplo, contrapartidas en forma de rebaja a su contribución a los presupuestos comunes o de un reconocimiento explícito del carácter excepcional de la deuda común que permitirá financiar el plan de reactivación), a cambio de permitir la aprobación del plan de reactivación y los fondos comunes que son necesarios para desarrollarlo. Sobran aquí elucubraciones, porque en un par de días o en la próxima quincena sabremos cómo se concretan su tamaño, contenidos y alcance y si son suficientes. Si las negociaciones se prolongan hasta después del verano sería ya un pésimo indicio.

Una minoría privilegiada de países ricos del norte de la UE intenta desvirtuar el plan propuesto por la Comisión Europea (reduciendo significativamente su tamaño total o la proporción de las transferencias frente a los préstamos), acentuar su condicionalidad (asociándolo al cumplimiento de políticas de austeridad y reformas estructurales inasumibles por los países del sur de la eurozona) y adelantar los criterios de gestión y reducción de la deuda pública (consiguiendo algún tipo de respaldo a las arbitrarias e ineficaces reglas presupuestarias definidas por un Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997 que ha demostrado su completa inadaptación y su carácter contraproducente en situaciones de crisis o recesión). Se denominan frugales, defienden irreflexivamente egoísmos nacionales.

### **Dos propuestas en pugna para reducir la deuda pública**

Dos proyectos básicos de reducción de la deuda pública afilan sus armas para la batalla que tendrá lugar inmediatamente después de superar la recesión.

Por un lado, una **propuesta neoliberal** que pretende rehabilitar los objetivos de rápida consolidación fiscal y austeridad presupuestaria impuestas con especial rigor a los países más desequilibrados en sus cuentas públicas y exteriores del sur de la eurozona entre 2010 y 2014; por otro, una propuesta progresista y europeísta que pretende completar la ruptura con las políticas de austeridad y devaluación salarial que ya se ha iniciado con las políticas monetarias y presupuestarias expansionistas aplicadas en los últimos meses y que culminará con la mutualización de un plan de reactivación económica y con un futuro tratamiento de reducción de la deuda pública que no aboque a una nueva recesión.

La propuesta neoliberal defiende un rápido ajuste fiscal basado en reglas imperativas, poco adaptadas a las diferentes necesidades y distintas situaciones de las economías de los Estados miembros, y en objetivos difícilmente alcanzables que justifiquen la austeridad presupuestaria, la [devaluación salarial](#) para competir en costes laborales y la competencia fiscal para mantener la presión sobre los gastos públicos y conseguir recortes de los bienes públicos que abran nuevos espacios al negocio privado y la extensión de la regulación mercantil. Se trata de una opción difícil de aceptar por la ciudadanía de los países del sur de la eurozona que ya han probado tal medicina y sus nefastas consecuencias económicas y sociales y sabe de su ineficacia y de la desigualdad y el empobrecimiento que generan. Cabe suponer que los gobiernos y las fuerzas políticas que defienden ese tipo de propuestas confían en que pueden seguir beneficiándose del actual mal funcionamiento del mercado único, seguir cargando sobre sus socios del sur de la eurozona los costes generados por las insuficiencias institucionales de la UE y la eurozona y mantener el injusto reparto de costes que propician las políticas de austeridad y devaluación salarial impuestas a los socios más frágiles y la competencia fiscal y laboral entre los socios que suscitan.

En todo caso, la propuesta neoliberal se sustenta en un sueño insolidario y euroescéptico que es inaceptable para los países del sur de la eurozona y para buena parte de las clases trabajadoras que sufrirían un nuevo impulso de la polarización del mercado laboral, pérdidas de derechos laborales, peores condiciones de vida y trabajo y mayores riesgos de engrosar las filas del empleo indecente o ampliar los márgenes de la exclusión social. En todo caso, se trata de una propuesta inadmisibile.

La **propuesta progresista** incide en la posibilidad de una monetización definitiva e irreversible de la parte de la deuda pública que detente el BCE en su balance, como consecuencia de sus políticas de compra de deuda pública que, desde 2015, aseguran la financiación y la solvencia de los Estados miembros con mayores desequilibrios de sus cuentas públicas, ya que impiden que los mercados de deuda determinen las tasas de interés de las nuevas emisiones de deuda, y evitan que los Estados no obtengan la financiación que necesitan, dados los altos riesgos de que incumplan sus compromisos de pago en la fecha y monto debidos. El BCE ha intensificado en los últimos meses su política de recompra de deuda pública para permitir la financiación de la explosión de los déficits públicos causados por la indispensable acción pública contra la pandemia y la consiguiente recesión económica y seguirá haciéndolo para financiar la reactivación de la economía, superar la recesión y evitar una crisis de deuda.

La monetización permanente de la parte de la deuda pública generada por el covid no es una propuesta radical (no podría serlo en el contexto político actual y, al mismo tiempo, ser viable). Es una propuesta reformista de carácter progresista que proporcionaría estabilidad y bienestar al conjunto de la ciudadanía europea y los Estados miembros y que podría

contar, a poco que se explique, con el apoyo de la mayoría social y el beneplácito de la mayoría de las fuerzas progresistas y de izquierdas, democráticas y europeístas del Parlamento Europeo.

Existen varias fórmulas para lograr esa monetización indefinida de la deuda pública que detenta el BCE en su balance y descargar a los Estados del sur de la eurozona de una parte sustancial de su deuda: desde las fórmulas más vistosas y directas de eliminación de esas deudas del balance del BCE hasta su perpetuación explícita como deuda pública perpetua o a 100 años, pasando por fórmulas más blandas (porque generarían menos inquietud en los mercados y entre los agentes inversores privados y, por tanto, menos resistencias y polémicas innecesarias de alta intensidad ideológica) de una renovación indefinida de la deuda pública, emitiendo a su vencimiento nuevos títulos de deuda de similares características. Sería una fórmula que evitaría a los Estados la devolución del principal de la deuda que les fue prestado y que no implicaría costes financieros o de gestión significativos. Ni para los Estados de la eurozona, que se limitarían a pagar los intereses, que les serían devueltos por el BCE; ni para el BCE, que cobraría los intereses pagados por los Estados y se los devolvería de forma inmediata, sin más gastos que los que conlleven las mínimas tareas administrativas que supone realizar los correspondientes apuntes contables.

Con cualquiera de estas fórmulas se conseguiría una reducción sustancial de la deuda pública de los Estados miembros de la eurozona, que de media supondría un recorte de cerca de 30 puntos porcentuales (de suponer algo más del 100% del PIB a situarse por debajo del 75%, hasta un nivel gestionable), que afectaría en mayor medida a los países más endeudados y que, por ello, se han beneficiado en mayor medida de las políticas de compra de deuda pública en los mercados secundarios desarrollada por el BCE.

La anulación explícita de la deuda pública emitida por los Estados miembros tendría menos posibilidades de realización que las propuestas más blandas de prolongación indefinida de la deuda en el balance del BCE. Pero lo sustancial es entender que se trata de una batalla pendiente y que existen fórmulas sencillas para reducir la carga de deuda pública entre las que elegir.

El endeudamiento público no supone una cadena perpetua para esta generación o las próximas. Esa es una de las tantas mentiras interesadas que las fuerzas políticas conservadoras, los dogmas neoliberales y los intereses insolidarios de algunos gobiernos se obstinan en propagar. En su momento, cuando se haya superado la recesión, existirán propuestas progresistas que permitirán reducir significativamente la deuda pública de los países más endeudados e impedir que fuerzas insolidarias utilicen de nuevo la deuda pública como un dogal con el que volver a imponer a los países del sur de la eurozona las políticas de austeridad y devaluación salarial que tan nefastos resultados ocasionaron entre 2010 y 2014.

En política, lo decisivo para las fuerzas progresistas y de izquierdas no es marcar con agitación o referencias ideológicas las propuestas que defienden y plantean, sino encontrar las brechas y las alianzas que permitan concretarlas, dando soluciones, muchas veces parciales y provisionales, a los problemas que cada coyuntura plantea a las clases trabajadoras y a la mayoría social que pretenden representar.



Paso, por último, a intentar contestar, con todas las cautelas e incertidumbres que rodean a la evolución de la pandemia y los rasgos definitivos del plan europeo de reactivación económica pendiente de aprobación, a los interrogantes planteados en el título.

**¿Cómo?** Hay dos propuestas básicas para afrontar la necesaria reducción de la deuda pública, la neoliberal y la progresista. Conviene dar a conocer sus rasgos e implicaciones principales para que la ciudadanía pueda elegir con cierto conocimiento de causa cuál de ellas responde mejor a sus intereses y valores.

**¿Cuándo?** No es un problema a resolver de forma inmediata. Será después de superar la recesión, previsiblemente en 2023, cuando habrá que encontrar una solución consensuada al insostenible nivel de la deuda pública que por entonces se habrá acumulado.

**¿Quién?** Depende de la fórmula de reducción de la deuda que resulte vencedora. La propuesta neoliberal defiende los privilegios y el bienestar de una parte de los países de la UE y de las clases y sectores sociales que concentran rentas y patrimonios, suponiendo que podrán seguir disfrutando de las ventajas del actual mercado único y descargando los incontables costes que ocasiona su mal funcionamiento sobre los países del sur de la eurozona y buena parte de sus clases trabajadoras. La propuesta progresista apuesta por una reducción significativa de la deuda pública que facilite su gestión posterior y que, lejos de perjudicar a una parte de los socios o de la ciudadanía, beneficia al conjunto y permite el desarrollo de un proyecto de unidad europea sustentado en la solidaridad y la cohesión.

La decisión no está escrita de antemano, la ciudadanía tiene la palabra y parte de la respuesta a esos interrogantes.

## **Fumata blanca con trazas grises y anaranjadas en la cumbre europea**

21 de julio de 2020.

El acuerdo se hizo letra y documento firmado esta madrugada del martes 21 de julio, a las 5:28 h. Tras una larga y tensa reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países de la Unión Europea (UE) que comenzó el viernes, 17 de julio. No es el mejor acuerdo posible, tampoco el peor; servirá para impulsar la imprescindible recuperación económica y supone una contribución que será decisiva en los países del sur de la eurozona para afrontar la recesión y superarla.

El Consejo Europeo ha elegido el acuerdo frente al bloqueo (todas las partes han cedido mucho) e inicia otro rumbo; todavía no significa un abandono definitivo de la fallida estrategia de austeridad y devaluación salarial impuesta a los países del sur de la eurozona entre 2010 y 2014, pero en una crisis inédita y en un acto de voluntad política y capacidad de acuerdo excepcional, la cumbre europea da vía libre a experimentar un cambio de estrategia medido y controlado. Ya veremos su alcance, recorrido y limitaciones, pero lo acordado supone un importante paso adelante que, pese a algunas fragilidades y limitaciones, merece celebrarse.

Y es que el acuerdo tiene algunas trazas grises y tonos anaranjados, porque Holanda y los otros cuatro países (Austria, Dinamarca, Finlandia y Suecia) contrarios a la deuda común y a las transferencias han conseguido reducciones significativas en la primera y las segundas, a lo que suman la creación de un freno de emergencia que no supone la condicionalidad que

pretendían (realización de nuevos recortes en las pensiones o la obligación de no tocar las reformas desreguladoras del mercado laboral) ni la posibilidad de que sea utilizada por un solo país para bloquear el plan de reactivación y las transferencias. [La banda de los 4](#), a la que se ha sumado Finlandia, consigue reducir su contribución a los presupuestos comunes y la ilusión de una firmeza política en la defensa de sus intereses nacionales que pueden darle algunos réditos electorales frente a sus envalentonadas [extremas derechas](#) y derechas conservadoras xenófobas y neosoberanistas, pero no han conseguido bloquear el plan ni desvirtuar sus contenidos y objetivos.

La condicionalidad política destinada a los gobiernos de Hungría y Polonia para que respeten los principios democráticos y los derechos humanos se han dejado de lado, sin vincularlos al desembolso de los fondos comunes, pero se seguirá presionando para que tales principios no puedan ser apartados o despreciados por ningún Estado miembro de la UE. Veremos si esos gobiernos entienden que la decisión de la cumbre no supone complacencia con su actuación ni implica una relajación de la presión para que comprendan que la pertenencia a la UE supone también regímenes políticos plenamente democráticos y cumplimiento de los derechos humanos.

Comienza otra etapa de la UE, con deuda común, financiación comunitaria y mutualización de un plan de reactivación económica que se concentrará en los países del sur de la eurozona

Comienza otra etapa de la UE, con deuda común, financiación comunitaria y mutualización de un plan de reactivación económica que se concentrará en los países del sur de la eurozona e impulsará un cambio del modelo de crecimiento sustentado en la transición digital y verde y en la modernización y el impulso de las estructuras, actividades y especializaciones productivas que tendrán un papel económico central en las próximas décadas. Y se emprende un nuevo rumbo que permite atisbar un proceso, también duro y complejo, de armonización e integración fiscal. Nada impide que, si este nuevo rumbo permite ir superando la recesión y avanzar en los objetivos planteados, se puedan aprobar nuevas [emisiones de deuda común](#) y una ampliación de la financiación comunitaria. O, en sentido contrario, que haya retrocesos y repliegues hacia las estrategias y políticas temporalmente desplazadas por este acuerdo. No hay una victoria ni una derrota definitivas. Las espadas seguirán en alto y la confrontación entre los diferentes proyectos europeos y fuerzas políticas seguirá su curso. Así son los acuerdos que satisfacen al conjunto de los participantes, se ceden algunos aspectos porque se considera que el resultado merece la pena y permiten seguir avanzando sin que nadie haya tenido que considerarse vencedor ni vencido.

¿Cómo valorar el resultado de la cumbre? Habrá deuda común que permitirá las transferencias, aunque se reducen un 22%, desde los 500 mil millones de euros de partida a los 390 mil millones finales, pero a cambio se aumentan los préstamos, con bajos intereses y plazos largos de devolución, para que la cifra global se mantenga en los 750 mil millones, que acabarán mayoritariamente en las economías de los países del sur de la eurozona, los más perjudicados por la pandemia, y permitirán remontar la recesión, reduciendo sus costes e impactos destructivos económicos y sociales. La condicionalidad que se ha aprobado no implica imposición comunitaria sobre las políticas que decidan democráticamente las ciudadanías de cada Estado miembro, ni mucho menos una vuelta a la estrategia de austeridad y devaluación salarial impuesta entre 2010 y 2014. Tampoco se ha admitido el

permanente bloqueo que supondría el derecho de veto por parte de un solo país, como pretendía Holanda, para marcar los objetivos y acomodarlos a criterios políticos diferentes a los que apruebe cada ciudadanía y sus representantes políticos.

Aunque resulta difícil valorar el acuerdo con objetividad, en medio de la niebla de los pulsos y refriegas que se han desarrollado en los últimos días, vamos a intentar una primera aproximación.

Lo más importante para España. En los aspectos económicos, permiten un mayor margen de actuación para la elaboración y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2021. Con una aportación comunitaria que va a suponer en total más del 11% del PIB, el gobierno de coalición progresista va a poder consolidar la gobernabilidad y seguir haciendo las políticas de concertación social, apoyo al tejido empresarial y rescate social que ha impulsado en los últimos meses. Sin esa aportación, sería imposible y nos esperaríamos una larga y destructiva recesión económica y una aún más larga convalecencia económica y social muy propicia para la desestabilización política y la tensión social.

En el plano político, permite que la patronal se distancie aún más de la estrategia de acoso e ingobernabilidad de Casado y Abascal, ya muy tocada tras el resultado de las recientes elecciones autonómicas gallegas y vascas. Además, proporciona tiempo para negociar reformas pendientes de gran calado (como la del mercado laboral, el sistema fiscal o la extensión y reforzamiento del escudo de protección social) y complementa los fondos nacionales para abordar la reactivación económica y superar la recesión, impulsando al tiempo una transición digital y verde que permita cambiar nuestro modelo de crecimiento, modernizar especializaciones productivas y crear puestos de trabajo decentes.

Lo más importante para Europa y el proyecto de unidad europea. Se consolidan cambios decisivos (deuda común, transferencias, políticas monetarias y presupuestarias expansionistas, cuestionamiento y abandono de reglas fiscales inadaptadas a las situaciones de crisis, olvido de la estrategia de austeridad y devaluación salarial como remedio para abordar la crisis) que facilitarían que el mercado único funcione mejor y la comprensión de la ciudadanía europea de las ventajas que tiene la cooperación para abordar los problemas comunes y del carácter contraproducente de sustentar las relaciones entre socios que comparten un mercado único y, gran parte, una moneda única en la competencia en costes laborales y fiscales que perjudican al conjunto y suponen la reducción de los bienes públicos y el bienestar. Además, los Estados y las instituciones comunitarias asumen sus responsabilidades y no atribuyen en exclusiva a los mercados la tarea de asignar recursos, seleccionar sectores y actividades de futuro o remunerar los factores productivos.

La economía europea necesitaba un plan comunitario de relanzamiento económico para mitigar los impactos destructivos de la recesión e impedir daños estructurales sobre el tejido productivo y empresarial, pérdida de productividad y crecimiento potencial o mínima y desigual modernización de estructuras y especializaciones productivas que derivan en divergencias permanentes, tanto de carácter productivo como en los niveles de renta de los Estados miembros. Europa puede mejorar el funcionamiento del mercado único, evitar que se siga fragmentando y ganar futuro con este plan de reactivación económica.

No es un paso de gigante para Europa, es un paso limitado pero muy importante. [Evita la parálisis y la decadencia de Europa](#), permite respirar y avanzar a los países del sur de la eurozona y evita que las divergencias productivas y de renta entre los países ricos y

equilibrados del norte o el centro de la UE y el resto de los Estados miembros se cronifiquen y amplifiquen hasta niveles que obstruyan el funcionamiento del mercado único y hagan inasumible para los países del sur su participación en la UE. Faltan muchos pasos por dar y muchas reformas por hacer, pero sin el acuerdo alcanzado anoche, nada sería posible. Hay vida, cooperación y Europa por delante.